



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1995/17/Add.2
26 de julio de 1995

ESPAÑOL
Original: CHINO/ESPAÑOL/
INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
47º período de sesiones
Tema 10 del programa provisional

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DETENIDOS

Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de
la resolución 1994/33 de la Subcomisión

Adición

El presente documento contiene información presentada por los Gobiernos de China, Malta, México, Uruguay y Yugoslavia, recibida después de la preparación de los documentos E/CN.4/Sub.2/1995/17 y Add.1.

China

[Original: chino]
[5 de mayo de 1995]

A.

1. China considera que las personas cuyos derechos humanos y libertades fundamentales han sido violados tienen derecho a la indemnización que establece la ley. Los instrumentos internacionales de derechos humanos ofrecen numerosas ideas acerca de la cuestión de la indemnización a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que informan sobre los temas de la promoción y protección de los derechos humanos y la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Los países interesados deben procurar aumentar sus investigaciones y elaborar leyes y reglamentos sobre la cuestión de la indemnización. Como vivimos en un mundo rico y variado donde los diferentes países y regiones tienen sistemas políticos, niveles de

desarrollo, historias y antecedentes culturales diferentes, es natural que existan también divergencias en las formas y enfoques que se adoptan frente a la promoción de los derechos humanos. Así pues, al mismo tiempo que se pone de relieve la universalidad de los derechos humanos, no se deben pasar por alto las características peculiares de los países y regiones, y esto puede aplicarse igualmente a la legislación y la práctica en materia de indemnización. El Gobierno chino cree que cada país debe establecer sus propias leyes sobre formas, procedimientos y mecanismos de indemnización, y sus propios medios específicos de aplicarlos, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales.

B.

2. China respeta, promueve y protege en todo momento los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, y cumple escrupulosamente los acuerdos internacionales de derechos humanos pertinentes. Durante años ha trabajado afanosamente y con notable éxito en la legislación y práctica de la indemnización. La Constitución dice: "El que haya sufrido pérdidas a causa de la violación de sus derechos ciudadanos por parte de un organismo del Estado o su personal tiene derecho a la indemnización de acuerdo con las estipulaciones de la ley".

3. La Ley de procedimiento administrativo fue publicada y entró en vigor en octubre de 1989. Dicha ley, establece que los ciudadanos chinos, las corporaciones y otras instituciones tienen derecho a iniciar procedimientos administrativos contra cualquier órgano gubernamental o empleado del mismo cuyos actos quebranten sus legítimos derechos e intereses.

4. En mayo de 1994 China promulgó una Ley de indemnización estatal. Esta ley, tomando como base las disposiciones pertinentes de la Ley de procedimiento administrativo, estableció disposiciones concretas respecto del ámbito, procedimiento y criterios para la indemnización administrativa, y añadió normas sobre la indemnización penal, estableciendo así un sistema de indemnización estatal bastante completo. Se trata de un sistema importante que se deriva del sistema de procedimiento administrativo y del sistema de recurso administrativo. Contribuye a la creación de una administración limpia y honesta, no sólo por lo que respecta al derecho de los ciudadanos, corporaciones y otras instituciones a recibir una indemnización del Estado de acuerdo con la ley, sino también por lo que respecta al buen desempeño de las funciones por parte de los órganos administrativos y de sus empleados. Protege el orden social y los estrechos vínculos existentes entre el Gobierno y el público en general, y salvaguarda y promueve la creación y mejoramiento de un sistema socialista de mercado, todo lo cual es sumamente importante. La Ley de indemnización estatal entró en vigor en enero de 1995.

5. En enero de 1995 el Consejo de Estado hizo públicos unos Métodos para la tramitación de los costos de la indemnización estatal, en los que se establecían disposiciones concretas en relación con la procedencia y administración de los fondos destinados a las indemnizaciones, se garantizaba el derecho de los ciudadanos, corporaciones y otras instituciones a percibir indemnizaciones estatales de acuerdo con la ley, y se instaba a los órganos

estatales a desempeñar sus funciones adecuadamente. En diciembre de 1994 la Corte Suprema del Pueblo pidió a los tribunales intermedios y superiores que creasen antes del final de enero de 1995, comités de indemnización y el mecanismo necesario para poder ejercer su facultad legal de dictar decisiones definitivas sobre indemnización penal.

6. La aplicación de la Ley de indemnización estatal hace que la indemnización estatal, que antes era una política fiable, pase a ser una ley fiable, con lo que se mejora el sistema de indemnización estatal y se garantiza el cumplimiento de la Constitución. Todos los órganos administrativos, los órganos judiciales, los órganos de procuración y las instituciones conexas de China están ahora muy ocupados en divulgar la ley y establecerla en todas partes. Al mismo tiempo, la ley está siendo estudiada seriamente por los ciudadanos chinos, las corporaciones y otras instituciones, con objeto de poder comprender el alcance de la indemnización estatal y los procedimientos para aplicarla, y para estar bien preparados para invocar la ley en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Malta

[Original: inglés]
[16 de junio de 1995]

1. La Constitución de Malta prevé reparaciones para todas las violaciones de los derechos y libertades fundamentales. En efecto, toda persona cuyos derechos fundamentales hayan sido violados puede presentar una solicitud ante la Sala Primera del Tribunal Civil para que se oiga su demanda. Los tribunales han dictado sentencias para la indemnización de los daños materiales y morales. La persona puede recurrir también al Tribunal Constitucional si la Sala Primera del Tribunal Civil considera que la denuncia de violación es infundada.

2. En cuanto al derecho que otorga la ley a la rehabilitación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, hasta el presente no se ha planteado esa necesidad, porque no existen antecedentes en Malta de que se hayan cometido nunca en este país violaciones tan graves de los derechos humanos.

México

[Original: español]
[18 de julio de 1995]

El Gobierno de México presentó una copia del Decreto del 10 de enero de 1994 del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos promulgado por el poder ejecutivo* que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la legislación nacional relativos al resarcimiento de daños materiales y morales causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

* Puede consultarse en los archivos de la Secretaría.

Uruguay

[Original: español]
[13 de junio de 1995]

1. La Constitución uruguaya regula el régimen de responsabilidad extracontractual resultante del daño inferido a particulares por parte de agentes del Estado. Dispone el artículo 25 del texto constitucional "el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección". Por su parte, el artículo 26 regula "cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación".
2. Estas disposiciones constitucionales fueron el fundamento normativo para la reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Numerosos casos de ciudadanos uruguayos, que habían sufrido conculcaciones a sus derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado durante la vigencia del Gobierno de facto fueron indemnizados. El Estado, a través del Ministerio de Defensa Nacional, transó con los perjudicados para establecer el quantum de la indemnización.
3. En el ámbito de la restitución, la Ley N° 15.737 de 8 de marzo de 1985, y su Decreto reglamentario N° 256/985 de 27 de junio de 1985, dispusieron la restitución de los bienes que habían sido confiscados durante la época del proceso militar. Esta medida se completó con la instrumentación de mecanismos de compensación para aquellos bienes que por alguna razón no fuera posible su devolución.
4. Idéntico propósito perseguía la Ley N° 15.783 conocida como "Ley de destituidos", que dispuso la reposición a sus cargos de todos los funcionarios públicos, no militares, que desde 1973 a 1985 hubieran sido destituidos de sus cargos por razones de índole política. Todas las medidas adoptadas constituyen el marco de aceptación del Estado uruguayo al legítimo derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Yugoslavia

[Original: inglés]
[13 de julio de 1995]

1. La República Federativa de Yugoslavia observa constantemente, a través del mecanismo de su sistema jurídico y en la práctica, el principio constitucional de la libertad e igualdad de todos sus ciudadanos sin distinción de ningún género. Toda incitación y provocación a la desigualdad nacional, racial, religiosa o de otra índole es contraria a la Constitución y sancionable en virtud de las leyes yugoslavas.

2. Las actividades de las organizaciones políticas, sindicales y de otra naturaleza tendientes a violar las libertades y los derechos garantizados de los hombres y de los ciudadanos o a incitar a la intolerancia o al odio nacional, racial, religioso o de otra índole están sancionadas por la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia y las constituciones de las repúblicas que la integran.

3. Las organizaciones o asociaciones cuyos programas o estatutos contengan fines tendientes a violar las libertades y los derechos garantizados de los hombres y de los ciudadanos, y/o a incitar a la intolerancia o al odio nacional, religioso, racial o de cualquier otra índole no pueden registrarse como organizaciones políticas o asociaciones de ciudadanos. Si esos fines se proclaman después de su establecimiento y registro, esas organizaciones o asociaciones serán prohibidas. Los procedimientos relativos a la prohibición de los partidos políticos y asociaciones de ciudadanos se sustancian ante el Tribunal Constitucional Federal, y/o ante los tribunales constitucionales de las repúblicas constituyentes, y las inicia ex officio el organismo estatal que se encarga del registro de los partidos políticos y asociaciones de ciudadanos, o el fiscal competente.

4. La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia establece, con arreglo al derecho internacional, disposiciones detalladas relativas a la condición jurídica de las minorías nacionales.

5. La República Federativa de Yugoslavia reconoce y garantiza, de acuerdo con el derecho internacional, los derechos de las minorías nacionales a la preservación, fomento y expresión de sus peculiaridades étnicas, culturales, lingüísticas y de otra índole, así como a la utilización de símbolos nacionales. Los miembros de las minorías disfrutan del derecho a la libre expresión de su identidad y cultura nacionales, y del derecho a utilizar su propio idioma y alfabeto. En las zonas donde las minorías nacionales son más numerosas, su idioma y alfabeto se utilizan oficialmente y sus miembros disfrutan del derecho a la enseñanza y a la información pública en su propio idioma. Tienen también derecho a crear sus organizaciones y asociaciones culturales independientes, que se financian con carácter voluntario y pueden recibir una ayuda del Estado.

6. Con arreglo a la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia, los miembros de las minorías nacionales disfrutan, tanto en la República Federativa de Yugoslavia como fuera de sus fronteras, del derecho a establecer y desarrollar libremente relaciones mutuas con miembros de su nación, así como a participar en los trabajos de las organizaciones internacionales no gubernamentales. No podrá imponerse ninguna restricción al ejercicio de este derecho salvo en los casos en que vaya en detrimento de la República Federativa de Yugoslavia o de alguna de sus repúblicas constituyentes.

7. Las libertades y derechos de los hombres y de los ciudadanos, incluidas las libertades y derechos concretos garantizados por la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia y las constituciones de sus repúblicas constituyentes, se ejercen con arreglo a esas constituciones. No obstante,

en los casos específicamente enumerados en esos documentos, la ley puede regular la forma en que se ejerzan esos derechos. Por ejemplo, el derecho a utilizar su propio idioma y alfabeto y el derecho a la enseñanza en el idioma propio están definidos de forma más específica en una ley independiente. Los mecanismos para controlar y vigilar el ejercicio de las libertades y derechos corren a cargo de los órganos de poder legislativo y ejecutivo federales yugoslavos y de los de las repúblicas constituyentes.

8. La República Federativa de Yugoslavia cumple todas sus obligaciones con arreglo a la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, que ratificó en 1975. En virtud de las obligaciones que le impone la Convención, el Código Penal de la República Federativa de Yugoslavia prescribe una pena de prisión de seis meses a cinco años por el delito de perseguir a una organización o individuo por apoyar la igualdad de las personas.

9. Respecto de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Código Penal de la República Federativa de Yugoslavia define el delito de genocidio (art. 141). Este delito consiste en actos premeditados y planeados cometidos con la intención de destruir, en su totalidad o en parte, a los miembros de un grupo étnico, racial o religioso. Está castigado con una pena que va de 5 a 20 años de reclusión.

10. El principio constitucional de que todos los ciudadanos de la República Federativa de Yugoslavia son iguales y libres, cualesquiera que sean sus peculiaridades o condición personal, está garantizado en el marco del derecho penal, es decir, del Código Penal de la República Federativa de Yugoslavia y del derecho penal de sus repúblicas constituyentes, que prevén el castigo de todo aquel que cometa un delito de violación del derecho de los ciudadanos a la igualdad.

11. Toda persona tiene derecho a la misma protección de sus derechos en un procedimiento prescrito legalmente, y a toda persona se garantiza el derecho de apelar o entablar otros recursos legales contra una decisión que infrinja un derecho o un interés legalmente fundamentado (artículo 26 de la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia).

12. La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia garantiza el respeto a la persona y a la dignidad humanas en los procedimientos penales o de cualquier otra índole en caso de privación o restricción de libertad, así como durante el cumplimiento de una pena de prisión.

13. Además, la libertad de movimiento y residencia de los ciudadanos está complementada con el derecho a salir de la República Federativa de Yugoslavia y a regresar a ella. La libertad de religión de la persona está garantizada a través de la libertad de profesar pública o privadamente la religión y de realizar ritos religiosos, y en particular por el derecho a no revelar las propias creencias religiosas. Este grupo de libertades y derechos incluye también la disposición relativa a la protección del secreto de los datos personales y el derecho de todo individuo a tener acceso a sus datos personales.

14. El uso de la fuerza contra personas privadas de libertad o personas cuya libertad haya sido limitada, y toda extorsión de una confesión o declaración están prohibidos y sujetos a sanción. Nadie podrá ser objeto de tortura y trato o castigo degradante. No podrán realizarse en un individuo experimentos médicos u otros experimentos científicos sin su consentimiento (artículo 25 de la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia).

15. Por lo que respecta al respeto de la persona y de la dignidad humanas, el Código Penal de la República Federativa de Yugoslavia y la legislación penal de sus repúblicas constituyentes definen como delito todo maltrato en el desempeño de una función oficial.

16. En el caso de delitos cometidos por la violación de las libertades o derechos garantizados por la Constitución, corresponde principalmente al fiscal competente abrir ex officio un procedimiento penal contra sus autores, si bien algunos procedimientos penales son iniciados por la parte lesionada sobre la base de una demanda privada.

17. Cuando algunas libertades y derechos del hombre y del ciudadano garantizados por la Constitución hayan sido violados por un acto particular de una autoridad judicial o administrativa u otro órgano del Estado o entidad jurídica en el ejercicio de sus funciones públicas, la persona lesionada tendrá derecho a presentar una demanda constitucional ante el Tribunal Constitucional Federal cuando no exista alguna otra protección legal.

18. La demanda constitucional, además de poderla presentar la persona cuyos derechos o libertades han sido violados, podrá ser interpuesta en su nombre por una asociación de ciudadanos u otra entidad jurídica que, en virtud de su estatuto, se ocupe de la protección de las libertades y derechos del hombre y del ciudadano ante el tribunal.

19. Si el Tribunal Constitucional Federal dictamina que los derechos o libertades garantizados por la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia han sido violados por un acto particular de un órgano del Estado u otra entidad jurídica en el ejercicio de sus funciones públicas, declarará nulo y sin valor ese acto particular y resolverá que se supriman las consecuencias del mismo. En el caso en que esos derechos y libertades hayan sido violados por un acto de dichos organismos o entidades, el Tribunal prohibirá esas acciones y ordenará que se supriman las consecuencias de las mismas.

20. Toda persona tendrá derecho a una compensación por el daño material o moral sufrido como consecuencia de un trabajo ilegal o incorrecto de un funcionario de un organismo estatal, o de una entidad jurídica en el ejercicio de sus funciones públicas. El daño será indemnizado por el Estado o la entidad jurídica en el ejercicio de sus funciones públicas.

21. El derecho a reclamar una indemnización podrá ejercerlo toda persona condenada injustamente contra la cual se haya dictado una sentencia legalmente válida, o que haya sido declarada culpable pero haya sido absuelta y posteriormente, en virtud de un recurso legal extraordinario, se hayan

suspendido debidamente los nuevos procedimientos, o haya sido absuelta en una sentencia legalmente válida o hayan sido rechazadas las acusaciones formuladas contra ella.

22. El derecho a reclamar una indemnización prescribe a los tres años de la fecha en que se dictó en primera instancia una sentencia firme de absolución del acusado, o de la fecha en que se dictó una sentencia firme en la que se rechazaban los cargos, o de la fecha en que tuvo efecto la decisión adoptada en primera instancia de suspender el procedimiento, o de la fecha de recepción de la decisión dictada por un tribunal superior, si fue un tribunal superior el que dictó una resolución sobre la petición.

23. Si la reclamación de indemnización no es aceptada o si el organismo administrativo no adopta una decisión al respecto en los tres meses que siguen a la fecha de presentación de la reclamación, el demandante podrá intentar una acción para obtener una indemnización por los daños. Si se hubiera llegado a un acuerdo parcial sobre la reclamación, el demandante podrá intentar una acción para obtener una indemnización total por el daño sufrido.

24. Los herederos de una persona injustamente condenada tendrán derecho a continuar con la reclamación sólo por la indemnización del daño a la propiedad. Si la persona injustamente condenada ya hubiera hecho una reclamación por daños, sus herederos podrán continuar el procedimiento sólo dentro de los límites de la reclamación anteriormente formulada para la indemnización del daño a la propiedad.

25. Después del fallecimiento de una persona injustamente condenada, sus herederos podrán continuar el procedimiento para la obtención de la reclamación, o podrán iniciar un procedimiento si la persona injustamente condenada falleció antes del plazo legalmente establecido y no renunció a su reivindicación.

26. Tendrán también derecho a una indemnización:

- toda persona que ha sido detenida y contra la cual no se haya iniciado ningún procedimiento penal, o se haya suspendido el procedimiento contra ella por una decisión legalmente válida, o haya sido absuelta por una sentencia legalmente válida, o hayan sido rechazados los cargos formulados contra ella;
- toda persona que, después de cumplir una pena de prisión y, por haberse reabierto el procedimiento penal, por haberse solicitado la protección de la legalidad o por haberse solicitado la revisión de una sentencia legalmente válida, haya sido condenada a una pena de prisión más corta que la que ya había cumplido, se haya dictado contra ella una pena que no incluya la privación de libertad, o después de ser declarada culpable haya sido posteriormente absuelta;
- la persona privada de libertad sin una causa, o mantenida detenida durante más tiempo o en un establecimiento para cumplir la condena o

decisión a causa de un error o de una actuación ilegal de las autoridades competentes;

- la persona mantenida en detención durante un período más largo al de la pena de prisión impuesta en la condena dictada contra ella.

27. Si el caso relativo a la persona injustamente condenada o a la persona privada de libertad sin causa hubiera sido divulgado por los medios de información, y la reputación de dicha persona hubiera sido dañada, a petición de la persona perjudicada el tribunal hará pública en los diarios u otros medios de información una declaración de la decisión de la que se infiera que la condena fue injusta o que la privación de libertad fue ilegal. Si el caso no hubiera sido divulgado por los medios de información, el tribunal, a petición de la persona perjudicada, enviará esa declaración al órgano u organización en la que esté empleada esa persona, así como a la organización social o de otra índole, si ello fuera necesario para su rehabilitación. Si la persona condenada hubiera fallecido, dicha petición podrá ser enviada por su esposa, sus hijos, sus padres, o sus hermanos.

28. El tribunal de primera instancia que sustancia el procedimiento penal dictará una decisión ex officio para que se borre la condena injusta de los archivos penales. La decisión se enviará al órgano competente responsable del mantenimiento de los archivos penales. La información sobre la supresión de los archivos penales no se deberá dar a conocer a nadie.

29. A la persona injustamente condenada o a la persona privada de libertad sin causa o que perdió su empleo o seguridad social, se le reconocerán los años de servicio y de cotización a la seguridad social como si hubiera estado empleada durante el período que duró la condena injusta o la privación de libertad sin causa. El período durante el cual la persona en cuestión estuvo sin trabajar a causa de una condena injusta o privación de libertad sin causa se incluirá en sus años de servicio.
